

Casado, atrapado por los ultras

Rafael Simancas
Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes
y Asuntos Constitucionales

Hay dos maneras de valorar el resultado de unas elecciones anticipadas: en función de las razones aducidas para la anticipación o a partir de las consecuencias prácticas del escrutinio final.

Se miren como se miren los resultados de las elecciones anticipadas en la comunidad autónoma de Castilla y León, han sido un desastre, para quienes decidieron convocarlas en interés propio, para la ciudadanía castellano-leonesa y para el conjunto de los españoles.

Ni estabilidad ni gobernabilidad

Las razones que se esgrimieron para disolver el parlamento regional y llamar a las urnas tenían que ver con la estabilidad y la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Según su presidente, entonces, el acuerdo PP-Ciudadanos no aseguraba ya la continuidad y eficacia de la acción de gobierno.

Se convocaba a los electores, en consecuencia, para formar un "gobierno fuerte" con una "mayoría sólida" en el parlamento regional.

El resultado de la jugada no ha podido ser más frustrante, a la luz de tal propósito. El parlamento resultante de la votación del 13 de febrero está aún más fraccionado que el anterior. El grupo mayoritario, ahora el PP, lo es con menos escaños (31) que el anterior (35). Y si antes había dos fuerzas parlamentarias de carácter localista, ahora hay tres.

En la mejor de las perspectivas para el PP, van a gobernar cambiando a un socio cómodo y a la baja –Ciudadanos–, por otro socio mucho más incómodo y al alza –Vox–.

Casado se da un tiro en el pie

No obstante, y más allá de las razones expuestas públicamente, la motivación auténtica que llevó a Fernández Mañueco a convocar estas elecciones no tenía que ver con los intereses de los castellano-leoneses amenazados por una supuesta y nunca probada deslealtad de sus socios de coalición.

El presidente regional disolvió el parlamento por presiones de su partido a nivel nacional, cuyo líder Pablo Casado tenía sus propios objetivos. Primero, parar los pies a Isabel Díaz Ayuso en su pulso interno, demostrando que el PP también obtiene buenos resultados más allá del carisma de la lidereza madrileña.

Y segundo, dar cuerpo al argumento forzado sobre el "cambio de ciclo electoral" en España. Según los estrategas de la calle Génova, un gran triunfo electoral en Castilla y León colocaría a Pablo Casado prácticamente a las puertas de La Moncloa.

Solo que ese gran triunfo electoral no se produjo, y el PP ganó las elecciones por la mínima, a solo 15.000 votos del PSOE y perdiendo más de 55.000 votos respecto a la última contienda de 2019, en la que ya obtuvo su peor resultado histórico.

La debilidad del liderazgo de Casado se ha intensificado, además, como consecuencia de otros dos grandes errores no forzados: la trampa fracasada sobre la reforma laboral del Gobierno y el espionaje al descubierto sobre las corruptelas de su compañera y rival Díaz Ayuso.

Por tanto, si aquellas elecciones se convocaron explícitamente para cimentar la estabilidad parlamentaria del gobierno, e implícitamente para consolidar el liderazgo de Pablo Casado en el PP, el resultado ha sido demoledor.

La amenaza ultra

Las elecciones en Castilla y León han resultado una frustración para Fernández Mañueco, para Pablo Casado y para el PP, pero han tenido otras consecuencias negativas muy relevantes para la población castellano-leonesa y para la política española en general.

Porque estas elecciones convocadas a destiempo han fortalecido a la ultraderecha, multiplicando sus votos y su influencia institucional.

Nada más culminar el escrutinio, el líder ultra Abascal reclamó la vicepresidencia del gobierno regional y la aplicación de sus políticas anti democráticas desde el ejecutivo.

Y este desastre ya no afecta solo al PP y al equipo electoral de Casado en la calle Génova. Este drama supone un peligro cierto en la vida de millones de personas.

La eventual incorporación de Vox al gobierno autonómico de Mañueco, incluso su influencia determinante como socio parlamentario, constituye un retroceso extraordinario sobre el ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas.

Los ultras niegan la desigualdad entre hombres y mujeres, como niegan la existencia de la violencia de género. Por tanto, son un peligro para la vida de miles de mujeres amenazadas.

Los ultras son enemigos del Estado de las Autonomías, por lo que sus políticas debilitan de facto las capacidades y los recursos de las administraciones encargadas de gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales que cuidan de millones de ciudadanos y ciudadanas, los ultras no creen en Europa y, por tanto, dificultarán la participación de España y sus comunidades en las políticas integradas y responsables, entre otras muchas cosas, de la llegada de 140.000 millones de euros destinados a la recuperación justa y la modernización de nuestro país.

Los ultras señalan y amenazan la diversidad de condición o pensamiento, fomentando el odio a homosexuales, inmigrantes o comunistas. Sus referentes internacionales son precisamente los heraldos del odio, como Orban o Le Pen.

Los ultras son una amenaza para la convivencia democrática.

Y Casado acaba de fortalecerles con unas elecciones convocadas por su interés propio y fallidas tanto para él como para todos los demás. Excepto para los ultras.

La hora de la verdad

El PP de Casado se enfrenta a la hora de la verdad, como le expuso el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados en su sesión del 15 de febrero.

Tiene que decidir si se suma a los esfuerzos de los demócratas españoles para frenar la amenaza

ultra o si les abre la puerta al gobierno de Castilla-León y a la influencia determinante en la política española.

Si decide enfrentar a los ultras, en toda España y para siempre, contará con la colaboración del PSOE.

Si, lo que es más probable, decide aliarse con aquellos que socavan los principios de nuestra convivencia en democracia, tendrá al PSOE y a la gran mayoría de la sociedad española enfrente.

La izquierda en reflexión

La izquierda tampoco ha obtenido un buen resultado en las elecciones castellano-leonesas.

El PSOE ha mantenido un meritorio 30% de apoyos, que reconocen el buen trabajo de Luis Tudanca y la organización socialista durante los últimos años. Si bien no han sido suficientes para cumplir el objetivo de revalidar la mayoría de 2019 y propiciar el cambio de gobierno.

Unidas Podemos e Izquierda Unida, pese a concurrir juntos por vez primera, también han retrocedido en votos y representación parlamentaria. La polarización no les ha beneficiado, pero sus dirigentes ya han reconocido que este resultado merece una reflexión.

El progresismo más localista ha obtenido unos apoyos significativos en algunas provincias, pero también han de reflexionar sobre sus consecuencias. El fraccionamiento de los votos de la izquierda conduce inexorablemente al triunfo de las derechas. Siempre ha sido así.

La paradoja consiste en que el "éxito" de algunas de estas candidaturas locales de carácter progresista, que luchan contra el abandono institucional y la despoblación, ha ayudado a confirmar en el gobierno regional precisamente a los responsables de ese abandono institucional y esa despoblación.

La rentabilidad que puedan obtener ahora de esa presencia parlamentaria mínima ante un gobierno de derecha y de ultraderecha no apunta a grandes metas.

Con el resultado del 13 de febrero no ganan las provincias despobladas, ni las pobladas, ni los pobladores en unos y otros territorios, ni tan siquiera el PP. En estas elecciones solo han ganado los ultras.

TEMAS